ÍNDICE.

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2010.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN , DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
14/2010 Y SUS ACUMULADAS 15/2010, 16/2010 Y 17/2010	ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD promovidas por los Partidos Políticos Convergencia, del Trabajo, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, demandando la invalidez del Decreto 262, por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 18, el artículo 27, el primer párrafo del artículo 33, el primer párrafo y la fracción III del artículo 35, la fracción IV del artículo 36 y la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Coahuila; el Decreto 263, por el que se expide el Código Electoral y el Decreto 264, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 82 y se reforma el artículo 89 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila (PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ).	3 A 90 EN LISTA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2010.

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SEÑORES MINISTROS:

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ.

OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO.

JUAN N. SILVA MEZA.

AUSENTE: SEÑOR MINISTRO:

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 10:55 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión pública de esta mañana. Informe señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número ciento ocho

ordinaria, celebrada el lunes dieciocho de octubre del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a la consideración de las señoras y señores Ministros el acta con la que se ha dado cuenta.

Si no hay comentarios ni observaciones de manera económica les pido voto aprobatorio. **(VOTACIÓN FAVORABLE) QUEDÓ APROBADA EL ACTA SECRETARIO.**

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

Se somete a su consideración el proyecto relativo a las

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2010 Y SUS ACUMULADAS 15/2010, 16/2010 Y 17/2010. PROMOVIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Bajo la ponencia del señor Ministro Valls Hernández y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en la sesión del día de ayer.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Según mis notas, agotamos el día de ayer el tema cuatro y continuaríamos ahora con el tema quinto, si nos hace favor, señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto señor Presidente. El tema cinco se refiere a la violación del derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus actividades, está contenido en el artículo 45, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Coahuila.

En este artículo el legislador local garantiza que los partidos políticos tengan derecho al financiamiento público: 1) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; y

2) Para gastos de campaña, esto es actividades tendentes a la obtención del voto en los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción XIV, inciso g), de la Constitución Federal; de ahí que el artículo impugnado, desde mi punto de vista, no resulta inconstitucional.

En el caso, dado que el precepto constitucional que resulta aplicable al supuesto que se analiza es el 116, fracción IV, inciso g) y no el número 41, Base II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, las legislaturas locales no se encuentran obligadas a garantizar que los partidos políticos reciban financiamiento público para el desarrollo de actividades de carácter específico sino solamente para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y de campaña.

Razón por la cual, no existe la pretendida inconstitucionalidad que apuntan los promoventes y por ello propongo reconocer su validez, siguiendo esta línea en el proyecto que he sometido a la elevada consideración de ustedes, señoras Ministras y señores Ministros, estimo también que contrario a lo señalado por los accionantes, la obligación que se establece en el artículo 35, numeral 1, inciso I) del Código Electoral del Estado, para que los partidos políticos sostengan un centro para la capacitación de sus militantes y dirigentes destinando al menos el 2% de su funcionamiento estatal ordinario anual para tales actividades no debe preverse como parte de un presupuesto que debe asignarse por concepto de

actividades específicas sino contemplarse como el propio artículo señala dentro del presupuesto que reciban para el desarrollo de actividades ordinarias.

Este es el tema que dejo a la consideración de ustedes.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pues está a la consideración del Pleno esta propuesta. Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente yo estoy de acuerdo con el proyecto del señor Ministro Valls, en realidad creo que es correcto el tratamiento que le da en el sentido de que si bien es cierto que en la Constitución Federal se utilizan tres rubros para efectos del financiamiento sobre todo tomando en consideración actividades de carácter específico, esto no quiere decir que el 116 no pueda determinar en qué rubro va a autorizar la creación de estos centros específicos, porque también el 116 se refiere a actividades ordinarias y a actividades de campaña.

Entonces yo coincido con el proyecto en esa parte, lo único que le pediría al señor Ministro ponente si es que tiene a bien aceptarlo, es que se transcribiera el artículo 35, fracción I, inciso 1) que también es parte del reclamo que se hace en este mismo concepto de invalidez y que desde luego la contestación que se da al respecto es correcta y que desde el encabezado se dijera que también es en

relación con ese otro artículo. Nada más señor Presidente gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto agradezco y acepto la sugerencia de la señora Ministra Luna. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: En el mismo sentido señor Presidente, habría que reflejarlo en resolutivo porque no está este artículo 35.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se reconoce validez del otro y no del 35 que también está impugnado. ¿Algún otro comentario? Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Solamente para agradecer al señor Ministro Cossío la sugerencia y desde luego, se reflejará en los resolutivos. Gracias.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Es el 35.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Es el 45.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Son dos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Los que están señalados, son dos artículos, el 45 fracción y el 35.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Y el 35, sí.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: El proyecto se refiere solamente al 45.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Sólo al 45.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pero el 35, numeral 1, inciso i), también está impugnado. Sí don Fernando Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente, el tema me parece que tiene dos ópticas: El 45 dice: “Que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en éste, conforme a las disposiciones siguientes, para el sostenimiento de las actividades ordinarias y luego para gastos de campaña”.

Consecuentemente, creo que este tema ya lo hemos abordado anteriormente y que podría reforzarse con algunas de las consideraciones que se han hecho sobre la libertad de configuración estatal, simplemente de refuerzo, porque me parece muy importante esto, hemos bordado varias veces en que mientras el Constituyente permanente, en la Constitución Política no les establezca límites, no tiene por qué haber otro tipo de límites, simplemente para reforzar esto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, aquí mi nota es que no hay precedente directamente aplicable, pero como concepto general de libre configuración de los Estados, no comprendió una partida para gastos específicos, aunque sí les impone después el gasto específico de un centro de capacitación.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Es el propio legislador.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Es el propio legislador, y manda que esto se realice con el 2% de la partida que corresponde a gastos ordinarios; o sea, que indirectamente dentro de esta partida de gastos ordinarios te estoy dando un 2% para un gasto específico, así está.

Estoy también de acuerdo con todo esto. Sí señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Solamente señor Presidente, para referirme a lo que ha sugerido el Ministro Franco, desde luego que sí, los argumentos que hemos manejado pudieran emplearse para reforzar este aspecto del proyecto, con todo gusto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Advierto aquí que esto va a ser recurrente en varios apartados, no sé si valga la pena darlo en el principio y que se tenga en cuenta en todo en lo que se resuelva. Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente, estamos de acuerdo con lo que

se ha planteado, creo que habría que tener mucho cuidado y no sé hasta qué punto valga la pena meter estas consideraciones en el proyecto, toda vez que la configuración legal, la libertad de configuración de los Estados, y cómo la entendemos, no ha sido uniforme por los miembros del Pleno; ayer mismo tuvimos una discusión con una votación muy apretada sobre lo que implicaba la libertad de configuración en algún aspecto específico, básicamente en la integración de la legislatura del Estado.

Como concepto genérico que califica todo el proyecto me parece bien, pero creo que habría que tener cuidado sobre todo, porque reitero, los extremos a los que nos lleva esta argumentación, algunos de nosotros no se compadece con lo que se ha sostenido por otros integrantes del Pleno. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bien, pues esto está dicho y ya lo toma en cuenta el señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Sí señor, con todo gusto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Alguien de las señoras y señores Ministros estaría en contra de esta parte del proyecto?

No habiendo nadie en contra, de manera económica les pido voto aprobatorio. **(VOTACIÓN FAVORABLE)** Informe señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en reconocer la validez de los artículos 35, numeral 1, en el inciso conducente, y 45, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Coahuila.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pasamos al tema seis, señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto señor Presidente.

El tema seis se refiere a la limitación a los partidos políticos para que reciban de sus órganos nacionales, recursos mayores al 50% del financiamiento ordinario y recursos en efectivo o en especie que representen un monto superior a la mitad del tope de gastos de campaña. Esto está contenido en el artículo 44, numerales 2 y 3 del Código Electoral de Coahuila.

En el proyecto propongo reconocer la validez del artículo 44, numerales 2 y 3, que se impugna, pues conforme al artículo 116, fracción IV, de la Constitución, no se prevén reglas específicas para el cálculo del financiamiento público que debe asignarse a los partidos políticos ni la forma de distribución de las cantidades que correspondan a cada uno

de ellos, por lo que la regulación de tales aspectos forma parte de la libertad de configuración normativa que tiene el legislador local, debiendo verificarse solamente que esa regulación cumpla con el principio de equidad; de modo que los partidos políticos puedan contar con recursos suficientes que aseguren el logro de sus objetivos y una competencia equilibrada, tomando en cuenta la fuerza y presencia política de cada partido sin que se interfiera en modo desmedido en el ámbito de autodeterminación con que cuentan para destinar recursos a fines específicos.

Ahora, el artículo 44, numerales 2 y 3, del Código Electoral del Estado de Coahuila, que se impugna, establece limitaciones en cuanto a la cantidad de recursos que los partidos políticos pueden recibir de sus órganos nacionales para gastos ordinarios y de campaña, lo que en la consulta que estoy sometiendo a la elevada consideración de ustedes, estimo que aun cuando pudiera considerarse una invasión a la vida interna de los partidos políticos nacionales en cuanto limita su libertad para determinar el monto y destino de sus recursos, esto encuentra plena justificación en el hecho de que deben garantizarse condiciones de equidad en la contienda, mediante el establecimiento de un sistema de distribución del financiamiento público que compense de alguna manera la desventaja económica que tienen los partidos políticos estatales, que como ya se ha mencionado, solamente reciben financiamiento público por parte del Estado frente a los partidos políticos nacionales,

que además de éste pueden auxiliarse de los recursos que reciban de sus dirigencias nacionales.

Por lo que la referida invasión a la vida interna de los partidos políticos nacionales se encuentra no solamente justificada sino autorizada por ley en términos de lo que dispone el artículo 116, fracción IV, incisos f) y g) de la Constitución Federal, sin que esto coarte de un modo absoluto su libertad de autodeterminación, pues los órganos nacionales podrán destinar recursos a sus Comités estatales, y en este sentido construir una fuente más de financiamiento para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones estatales y municipales de Coahuila, limitándose únicamente el monto de estos recursos. Esto queda a la consideración de los señores Ministros.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Fernando Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor Presidente. Precisamente la solicitud en el punto anterior, yo no tendría inconveniente en el manejo que le quiera dar el ponente, en tanto quede claro, porque creo que una de las partes fundamentales para resolver estas cuestiones es en dónde es de libre configuración para el legislador local.

Y aquí precisamente, en lo personal, considero que esto no puede ser de configuración del legislador local, y voy a

explicar por qué. En este caso se está refiriendo al manejo interno del financiamiento público de los partidos nacionales, no estatales; esto está regulado en materia constitucional por el artículo 41 y en la materia legal, completito, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Estado podría establecer límites a la forma en que los partidos políticos usan sus recursos en su proceso electoral, que es en el que participan, pero no veo por qué le puedan imponer límites de ninguna naturaleza a los partidos políticos en el manejo de sus recursos, si lo vemos, dice, párrafos 2 y 3 del artículo 44: “El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades: –y dice– 2. Los recursos que un partido político reciba de sus órganos nacionales para gastos ordinarios no podrá ser mayor al 50% del financiamiento público estatal que anualmente le corresponda para tal efecto. Es decir, el partido político salvo que sea una interpretación conforme y se refiera exclusivamente a los recursos que el partido político nacional reciba por financiamiento público estatal, si no, me parece que la disposición como está en términos generales, sí violenta el régimen que rige a los partidos políticos nacionales en el manejo de sus financiamientos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: La intervención del señor Ministro Franco, me mueve a pedirle al señor secretario general de acuerdos, que consulte su sistema, si en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2009 que se menciona aquí como precedente del Estado de Coahuila, se

reconoció la validez por unanimidad de once votos. Quiero checar no sea que hayamos visto la norma constitucional.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Es la constitucional.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Por eso, pero si dice lo mismo y ya calificamos de que reconocimos validez, ahora la ley secundaria que se ajusta a ella y que la recoge, creo que simplemente debemos decir; ya se juzgó esta disposición en los mismos términos con relación a la Constitución, pero sólo para checar. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente, pero yo tengo en ese punto que no fue la Acción de Inconstitucionalidad 33/2009, sino la Acción de Inconstitucionalidad 21/2009, que es la que está citada en la página doscientos sesenta y nueve del proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Esa la tengo para el siguiente tema, reducción del plazo para promover el juicio electoral.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Estoy en la página doscientos sesenta y ocho, dice: "Limitación para que los partidos reciban de su órgano nacional recursos mayores al 50% etc.," y si ven la página doscientos sesenta y nueve, al comienzo dice: "Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 21/2009, este Tribunal Pleno..." y tiene una consideración. Sobre eso quería bordar, si me permite señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Por favor señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Porque está el problema de equidad, veo el problema también, estoy contra el proyecto, creo que lo que está sucediendo aquí es una situación que me lleva al principio de equidad que está impugnado, si ven las páginas cuarenta y uno y cuarenta y dos del proyecto, ahí claramente está señalado esto como un problema de equidad y ahora lo refería así el Ministro Valls. El artículo 44, de lo que habla es del régimen de financiamiento y sus modalidades, me parece muy importante el punto primero en sus distintos incisos, porque nos va señalando cuáles son las formas en que se da ese financiamiento y en el artículo 45, nos habla del derecho al financiamiento público; entonces, me parece que sí tendríamos que diferenciar ambas situaciones. El financiamiento público en el artículo 44, sólo se refiere al numeral 1, inciso a), mientras que ya el artículo 45, va a desarrollar todo el tema del financiamiento público.

La cuestión que a mí me genera problema es por qué los numerales 2 y 3 del artículo 44, finalmente terminan limitando las posibilidades para que los partidos políticos nacionales reciban de sus dirigencias nacionales un límite máximo de fondos que evidentemente pueden tener una composición en financiamiento público, financiamiento por militancia, financiamiento de simpatizantes, auto financiamiento o financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, y los partidos políticos

locales no tengan esta limitación; es decir, los partidos políticos nacionales, no pueden transferir a sus partidos políticos para las elecciones locales fondos, mientras que los partidos políticos locales a través de sus dirigencias estatales, evidentemente pueden transmitir este tipo de fondos a los partidos políticos. Me parece que el artículo está construido de una forma muy inteligente para impedir que en elecciones locales los partidos políticos transfieran recursos, insisto, a sus partidos políticos para la celebración de elecciones, pero no les introduce las mismas prohibiciones a los partidos políticos locales. ¿Dónde encontraría yo que un partido político local puede transferir fondos al partido político de carácter local para una elección también local? Creo que se genera una condición de descompensación en este sentido. Ahí encuentro un problema importante de inequidad como valor que señalaba el Ministro ponente y el único elemento que tiene el artículo 116, fracción IV en su inciso g), es que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades y las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales. ¿Esto a qué me conduce finalmente? y trato de sintetizar. Me conduce a decir que se genera, insisto, esta condición de inequidad porque los partidos políticos nacionales no pueden transferir fondos a sus representantes, al partido, a la modalidad por la que estén compitiendo, mientras que los locales no cuentan con una prohibición semejante para esta transferencia de fondos.

Entonces, también en este punto, hasta este momento, tengo dudas sobre la constitucionalidad de este precepto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Yo al contrario, advierto aquí una temperancia para que el partido político nacional que va a una elección local, transfiera fondos limitadamente sin exceder el 50% del financiamiento público estatal para gastos ordinarios y recursos en efectivo o en especie.

Pongo este ejemplo: La bolsa de financiamiento público para los partidos locales, le da cien millones de pesos a cada partido, no es así, pero con las fluctuaciones correspondientes, el partido político nacional, además de estos cien millones que recibe del financiamiento público, puede recibir un 50% adicional del partido político nacional, la dirigencia estatal se ve reforzada económicamente por la dirigencia nacional. Quiere decir que va a la liza, a la competencia política en mucho mejores condiciones que los partidos políticos estatales que no tienen esta fuente de recursos.

Ahora, ¿por qué no les prohíbe a los partidos políticos estatales hacer estas transmisiones? Porque es uno solo, tienen dirigencias municipales, pero también el partido político nacional puede ir a las elecciones municipales; los partidos políticos locales, dentro de sus fuentes de financiamiento tienen la prerrogativa del financiamiento público, más la fuente de recursos privados que le pueden llegar, pero también la dirigencia del partido nacional tiene acceso a esta fuente de recursos privados para el

financiamiento de sus actividades, lo único que se hace es evitar que llegue con mucha fuerza económica.

Tengo otro problema con esto, porque por disposición constitucional, las elecciones locales tienen que empatarse con las federales, y entonces ¿cómo se hace esto? si para la elección federal el partido político nacional puede ir con la totalidad de sus recursos, esta temperancia de que a la elección local no le puede dar más que hasta el 50%, se explica contablemente nada más, la dirigencia estatal lleva su propia contabilidad y no puede ingresar más allá de un 50% por encima de lo que el gobierno estatal distribuye a los partidos políticos. Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente. Entendí que el razonamiento del Ministro Cossío no iba tanto en relación al partido nacional que es obviamente a quien va dirigida ésta, ¿por qué? porque es el partido nacional, y luego tiene sus propios órganos a nivel estatal, municipal, distrital, etcétera, sino que no hay una prohibición similar de que pudieran recibir recursos de otra fuente los estatales, pero más allá de esta situación, en cuanto usted lo comentaba. A mí me parecería absolutamente plausible el argumento si lo sacáramos del sistema que tenemos, pero dentro del sistema que tenemos esto no se puede dar, los partidos políticos nacionales tienen un régimen muy estricto para el manejo desde el origen y gasto de sus recursos. Como usted bien dice, hay una norma constitucional que se estableció para lograr en la mayoría de los casos empatar las elecciones, pero sigue

manteniendo la posibilidad de elecciones que no coinciden con la elección federal; de hecho, por eso hay dos regímenes constitucionalmente para aquellos que celebran la elección en el año de la jornada electoral-federal, y los que no lo tienen así, lo que hay que hacer es empatar las fechas, eso sí, pero no en el año.

Ahora, los partidos políticos nacionales tienen un régimen muy estricto de control, independientemente de lo que digan las legislaciones locales, aquí estamos viendo la elección local, si fuera abierto este razonamiento, tendría toda la base para sustentar la validez, pero no es así, para eso son los topes de gastos de campaña y por eso los partidos políticos no pueden contratar en los medios libremente, hay un régimen que regula esto a nivel estatal, por más rico que sea un partido y más recursos que pase de un órgano nacional, digamos, o de las finanzas nacionales a un órgano estatal o un distrital, necesariamente para la elección local se sujeta a las reglas que fija la legislación local, y no podrá gastar más dinero de lo que fije como tope de gastos de campaña; de lo que se fije para las precampañas; no podrá tener acceso a los medios más allá de lo que fijan las propias normas locales. Consecuentemente, por eso yo sigo pensando que estos preceptos que les establecen estos límites a los partidos nacionales, sí invaden, insisto, la esfera de competencia federal para regular el funcionamiento de los partidos políticos en cuanto a su financiamiento y a su gasto general.

Ya en el estatal, se tendrán que sujetar a la legislación local, no podrán exceder los gastos de campaña, así tengan muchos más millones en sus arcas, no lo podrán hacer y también se tendrán que sujetar a los tiempos de radio y televisión que les otorgue el IFE, y los en medios impresos, pues evidentemente ahí hay un ámbito en donde también hay una regulación. Consecuentemente por estas razones, hasta ahorita yo sigo pensando que estas normas sí invaden la esfera de competencia del Congreso General y lo que los partidos políticos nacionales tienen, pueden o deben hacer.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Y yo sigo pensando que no es así señor Ministro, con todo respeto, por lo siguiente: Hay un tope de campaña y nadie debe gastar más allá, pero, por ejemplo: Un partido político nacional que va a una primera elección estatal va a ser tratado en el reparto de los fondos públicos, en el suelo, en la parte más pequeña del reparto, y sólo le permiten que sobre esta pequeña cantidad del reparto un 50% más que venga proveniente del partido nacional. ¿Por qué? Porque un partido político local que va en las mismas condiciones, está en esa misma situación; en cambio, si le permiten el ingreso ilimitado de recursos del partido político nacional, puede llegar a los topes de campaña, cuando los otros se van a quedar muy abajo. Al parecer los gastos, el financiamiento público se queda por abajo de los topes de campaña, entonces los esfuerzos para alcanzar este máximo de gastos, el partido nacional tiene ciertas ventajas.

Yo sé que hay partidos nacionales con aflicciones económicas muy serias y que tampoco es fácil que se desborden a sus dirigencias estatales, pero puede haber un interés específico en alguna elección estatal que permita grandes transferencias de fondos para colocar a un partido político nacional en desventaja de mejor situación económica respecto de los locales.

Lo que me preocupa y no sé si ya el señor secretario tenga el dato, es que en la Acción de Inconstitucionalidad, yo tengo aquí 33/2009 y acumuladas, de Coahuila, se reconoció la validez. Por favor señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Me permito informarle que en la Acción de Inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas, se impugnó el anterior Código Electoral del Estado de Coahuila en su artículo 50, fracción VII, que si gusta le doy lectura.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: El que señalaba: “El financiamiento por aportaciones de organismos ejecutivos de los partidos políticos nacionales a sus Comités estatales, podrá ser utilizado para sufragar los gastos generados por las actividades ordinarias permanentes que realicen los partidos políticos, pudiendo aplicar estos recursos a las precampañas y campañas electorales, siempre y cuando dichas asignaciones no

rebasen el tope de precampañas y campañas que se fijen en este Código”, y se reconoció la validez.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pero es distinto el contenido. Ya estamos a salvo de no incurrir en contradicción.

Pidió la palabra la señora Ministra Sánchez Cordero y una disculpa.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Precisamente señor Ministro Presidente ya tenía el artículo 50, fracción VII, la votación y sí es diferente.

También aquí veo una diferencia, es que el numeral 2 se refiere a gastos ordinarios, es decir, aquellos que están fuera del proceso electoral, en tanto que el numeral 3 se refiere a gastos precisamente de financiamiento tendentes a la obtención del voto, por eso estoy de acuerdo con el proyecto, con la argumentación que se establece en el proyecto, para mí es muy claro también Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Alguna otra intervención. Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Si, nada más para decir que también estoy de acuerdo con el proyecto y las razones que ha dado el Ministro Presidente me parecen muy claras, precisamente se trata de las circunstancias de financiamiento y por otro lado de los topes que se establecen en las campañas estatales y se complementan.

No creo que se confronten ambos principios, y de esta manera se logra esa equidad, precisamente para evitar que un partido con recursos provenientes de su dirigencia nacional pueda exceder cantidades que los otros no pudieran prever. Yo estoy de acuerdo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA:
Gracias señor Presidente.

Con todo respeto, creo que el punto es el que ha marcado el señor Ministro Franco, no creo que estemos, de entrada, salvo que salvemos el escollo y la barrera que ahora voy a referir, en un problema de equidad, sino estamos en un problema de competencia constitucional para regular o no lo que pueden hacer con el financiamiento público los partidos políticos nacionales; es decir, hay libertad o no de configuración sobre lo que los partidos políticos nacionales puedan hacer con su financiamiento, o este financiamiento, el uso del financiamiento, está regulado por el artículo 41 y por la legislación federal reglamentaria de este precepto y de otros; creo que este es el punto, y si nosotros decidimos que la utilización del financiamiento de los partidos políticos nacionales, más allá de los topes de campaña -que entiendo estos sí los pueden fijar los Estados-, es competencia federal, entonces a mí me parece que con independencia del tema de equidad sí habría una inconstitucionalidad en el precepto porque yo coincido con lo que ha dicho el Ministro Franco; de entrada, a mí me

parece que no hay competencia constitucional para que los Estados puedan establecer modalidades o limitaciones más allá de los topes de campaña –insisto- de cómo deben utilizar los partidos políticos nacionales sus recursos, y si esto es así, a mí me parece que si una legislación, —más allá de si esto genera una equidad o no—, entra a legislar sobre este tema, me parece que deviene en inconstitucional y este creo que es el punto toral en este aspecto, en este tema en particular estimo que no hay una libertad de configuración por parte de las legislaturas de los Estados y que más allá –insisto- de fijar topes de campaña no creo que puedan establecer limitaciones a los gastos ordinarios de los partidos políticos nacionales. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Yo, a diferencia de lo que acaban de decir el Ministro Zaldívar y el Ministro Franco, no veo un problema de competencia, creo que la fracción IV del artículo 116 en su inciso g), precisamente autoriza a las legislaturas de los Estados a establecer las condiciones de un sistema equitativo. Es de las poquísimas condiciones que se establecen en el inciso g); en el inciso h), se establecen límites a las aportaciones de simpatizantes y creo que ahí es donde se presenta la cuestión. A mí me sigue pareciendo a diferencia de lo que se dijo, que estamos frente a un tema claro de equidad, por qué razón, porque el artículo 44, en su numeral 2, habla de gastos ordinarios que no podrá recibirse un financiamiento mayor al 50% del

financiamiento estatal para gasto ordinario y después para procesos electorales estatales, que no podrá recibir de sus órganos nacionales un monto superior a la mitad del tope de campaña para la elección que corresponda. Si esto lo contrastamos contra el artículo 46, en su numeral primero dice: “El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades” en el inciso g) se dice que: “cada partido político podrá obtener como financiamiento hasta el 99% anual del monto que le corresponda por concepto de financiamiento público ordinario, el cual queda prohibido utilizarse para actividades de precampañas o campañas; asimismo podrá obtener con excepción de lo previsto en la fracción anterior hasta el 99% del financiamiento tendente a la obtención del sufragio, cantidad que podrá ser utilizada siempre y cuando no se rebasen los topes de precampaña y campaña fijados para la elección de que se trate en los términos del presente Código.

Lo que me parece que acontece es que el legislador del Estado, lo que está tratando de hacer es establecer una limitación a los partidos políticos nacionales para que puedan aportar recursos en las elecciones locales, mientras que está favoreciendo a los partidos políticos locales, para que no tengan esta limitación sino como dice este inciso, que acabo de mencionar, puedan recibir hasta el 99% adicional como tope, mientras que en el otro caso es el 50%. Ahí es donde me parece que se produce –y esa es mi perspectiva– una condición inequitativa tratando de

fortalecer a los partidos políticos locales frente a los nacionales.

La contingencia –y usted lo decía muy bien señor Presidente– de que pensemos que los partidos políticos nacionales son más ricos que los partidos políticos locales es posible, pero también es una contingencia donde podría ser al revés.

Me parece que se está tratando de fortalecer –insisto– una condición partidista al interior del Estado, limitando la posibilidad de los nacionales –en estos distintos porcentajes que acabo de mencionar– y ahí es donde creo que está una condición de equidad, y así es como votaré señor Presidente, creyendo que este precepto es inconstitucional. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Juan Silva Meza.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Gracias Presidente. Era en relación con este problema de las competencias, pero ya lo ha dicho el señor Ministro Cossío, tampoco creo que se presente un problema de competencia en sí mismo, inclusive pareciera que se generaría una contradicción, hablar de invasión de esfera competencial y de la libertad de configuración, como que es un choque difícil de manejar, sobre todo en el contenido del artículo 116, fracción IV, incisos c), f) y g), que desde mi punto de vista, y estando de acuerdo con el proyecto, sí propician condiciones de

equidad tanto para la recepción de financiamiento público en función de actividades ordinarias como para efectos de la obtención del voto durante los procesos electorales. Estoy de acuerdo con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Solamente una aclaración. El concepto de invalidez se plantea desde el punto de vista de si se interviene o no en la vida interna de los partidos no desde el punto de vista de que si es federal o es local la competencia. Así está el planteamiento que hacen, que impugnan, los partidos políticos actores; entonces aquí le estamos dando un sesgo –con todo respeto– que no corresponde al planteamiento que hacen los promoventes de la acción. Eso por una parte y por otra, a mí sí me queda muy claro que hay un principio de equidad acá. Los partidos políticos locales estatales solamente reciben recursos del gobierno del Estado. Los partidos políticos nacionales reciben esos recursos más los que les mandan sus dirigencias nacionales. Para mí sí es un problema de equidad y sostengo el proyecto en sus términos. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Yo también sostengo el criterio. Lo que me confunde un poco es que se ha hablado de que está interviniéndose en cómo gastar, en

la forma en que se van a distribuir o a gastar esos recursos, pero creo que el problema es, bueno ni de disponer, se trata de recibir los recursos ¿Qué cantidades puede la dirigencia nacional, entregar de recursos a la dirigencia estatal? Y aquí se establece precisamente un límite aplicable, desde luego, a todos partidos para que tengan igualdad y equidad en el manejo de los recursos; de tal manera que podrán disponer de ellos o gastarlos en la medida en que lo sea, claro se puede decir: Disponer por la dirigencia nacional para darlos a las dirigencias estatales, pero precisamente en la libertad de configuración que tiene el Estado se le está poniendo un límite para que a las dirigencias nacionales no les puedan dar mayores recursos que signifiquen romper con la equidad entre todos los partidos.

A mí me parece que –desde ese punto de vista– está muy sostenible el criterio.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Don Fernando ¿Quiere agregar algo?

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Presidente, nada más para hacer una precisión respecto al punto seis. En realidad el concepto de invalidez abarca — según el propio proyecto y así está en la demanda se puede ver en la foja doscientos dieciocho— varios aspectos, aquí se señalan tres y dice se violan los principios de equidad, legalidad e imparcialidad en materia electoral; este es el principio o concepto al que se refería el Ministro Cossío. Se limita el derecho de los partidos políticos a participar en las

elecciones estatales y municipales y se vulnera el ámbito de autodeterminación de los partidos políticos. Lo que entiendo de estas tres cuestiones es que sí cabe el análisis, además estamos en presencia de una acción de inconstitucionalidad; consecuentemente, creo que sí lo podemos analizar.

Ahora, simplemente reiteraría un aspecto que me parece muy importante: Estas son normas generales que se están estableciendo en un Código estatal, me pregunto: ¿Un partido político no puede disponer de sus recursos para hacer una campaña especial de difusión en un Estado, tratar de lograr mayor presencia en un Estado, en tanto respete las reglas que rigen el origen y el destino de sus recursos establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que es el que lo rige? Esta prohibición se lo impediría, no podrían mandar más del 50% del financiamiento público estatal que anualmente le corresponde para tal efecto, lo cual me parece —insisto— que vulnera la esfera que le corresponde al Congreso de la Unión para legislar en esta materia y sí vulnera la autonomía de los partidos políticos cuyo límite para estos efectos es la legislación federal y no las estatales, con esto yo concluyo señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ministra Sánchez Cordero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Bueno, al principio es muy sugerente la posición del Ministro estamos

hablando de elecciones locales, y este Código se está refiriendo a este tipo de elecciones; entonces, me queda muy claro que es constitucional. En fin.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ayer sustentamos una premisa, la refrendamos de que la disposición constitucional que permite a los partidos políticos nacionales participar en las elecciones locales, no es una autorización absoluta, sino que debe hacerlo en las mismas condiciones en que participan los demás partidos políticos estatales, ¿Cuáles son estas condiciones en materia de financiamiento? El reparto de los recursos estatales para las elecciones locales, tanto gastos ordinarios como gastos de campaña y la potestad que tienen todos los partidos políticos para incrementar estos haberes económicos, mediante el financiamiento privado, hasta alcanzar el 99% de los topes de gastos.

Muy bien, esto se respeta para las dirigencias estatales de los partidos políticos nacionales, se les da el reparto en las mismas condiciones que a los partidos estatales, ya con esto sin ninguna transferencia del partido político nacional, estarían en las mismas condiciones que los partidos políticos estatales para competir en la elección; sin embargo, esta norma le reconoce al partido político nacional, o más bien a la dirigencia estatal, le reconoce un plus, le dice: Admito que tu dirigencia nacional te mande fondos hasta el 50% de lo que yo te doy, pero no más, ésta es la condición para que puedas participar en el reparto de las prerrogativas económicas que da el Estado, van siempre

con un plus, que es el apoyo de la dirigencia nacional, así lo permite el Estado pero si dijera: No recibirán para las elecciones estatales ninguna aportación de la dirigencia nacional, lo estaría colocando exactamente en el mismo plano que a los partidos estatales. Bien, hay otra cosa. Fondos Federales. Para qué el gobierno federal financia a los partidos políticos ¿para elecciones locales? No, para locales no, hemos dicho que unas son las elecciones federales, que las reglas de las elecciones federales son muy claras, y obviamente a la Federación le interesan las elecciones federales; es decir, el destino originario de los fondos es para que un partido político nacional pueda competir en igualdad de condiciones electorales en las elecciones federales, hay permisión para que pueda transferir fondos para las elecciones estatales, pero no es ésta la finalidad del fondeo federal.

Hay otro argumento que sería verdaderamente imposible: Que un partido nacional transfiera a todas sus dirigencias estatales más allá del 50% de los fondos estatales. Tendría que repartir todos los recursos que recibe en treinta y dos entidades federativas, superando este 50% de los fondos estatales, a lo mejor le alcanza, no lo sé, pero no creo que haya afectación para la dirigencia estatal de un partido político nacional por el hecho, no de que le prohíban al partido nacional transferir fondos, si quiere que le mande todos los que quiera, solamente que si le manda más del 50% de lo que el Estado va a dar a los partidos, entonces

no lo tomará en cuenta para el reparto de fondos a la dirigencia estatal de un partido político nacional.

Es una medida protectora, sin lugar a duda, de los partidos políticos estatales; los más de ellos emergentes que compiten en condición de desigualdad propagandística, económica, de presencia respecto de los nacionales. Sí señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente. Pretendía no intervenir pero las intervenciones generan una discusión que creo que es sana, porque estos temas son importantes.

En primer lugar, aquí no estamos hablando de las elecciones, evidentemente es el impacto en las elecciones. Estamos hablando del régimen de financiamiento público que establece una ley local, y evidentemente tiene los dos aspectos que hemos platicado. Uno es para sus actividades ordinarias.

Los partidos políticos realizan actividades ordinarias a nivel federal y a nivel estatal y a nivel municipal obviamente, y participan en muchísimas otras elecciones, según el régimen electoral que tiene cada una de las entidades. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes.

Ahora bien, precisamente me parece que la diferencia estriba en eso. Las actividades ordinarias, el señor Presidente decía: No, el financiamiento que les dan a los partidos nacionales es para el orden federal, no es así. El

financiamiento que reciben los partidos políticos es, por un lado, para sus actividades ordinarias, todas las que realizan, independientemente de la elección que corresponda, es para todo. ¿Cómo lo utilizan? Ése es problema interno de los partidos, en tanto se sujetan a la regulación federal. Consecuentemente, creo que pueden hacer uso de sus recursos en tanto no violen esas disposiciones.

Hay el otro rubro para la obtención del voto, en donde aquí podríamos establecer una interpretación de que cuando la Constitución en el artículo 41, dice que hay un financiamiento para la obtención del voto, se debe reducir exclusivamente a la obtención del voto federal. Eso nos llevaría a un grave problema, por supuesto no lo comparto, que anunciaba el señor Presidente. Cuando las elecciones coincidan, las federales y las estatales, va a haber un problema mayúsculo e inclusive para el propio IFE para poder fiscalizar eso. Consecuentemente, no puede ser ésta la lectura.

Los partidos políticos nacionales tienen un régimen de financiamiento dual, efectivamente, como aquí se ha señalado, el federal y el local, pero las reglas que rigen al uso y manejo de esos recursos, desde su origen hasta su gasto, son las federales, y en las locales exclusivamente, y ahí sí estoy de acuerdo, para efectos del proceso electoral local. Efectivamente, el artículo 116, como lo decía el Ministro Cossío, establece una base, pero dice: Para que reciban financiamiento de manera equitativa. Y, obviamente, se está refiriendo a los partidos políticos

locales y federales, dado que tienen participación por disposición constitucional en las elecciones locales.

Consecuentemente, me parece que no podemos hacer una distinción del objeto de los financiamientos, podríamos discutir, y recuerden que yo inicié diciendo que podía llegarse a una interpretación conforme en un aspecto, pero el gasto ordinario de los partidos políticos como su nombre lo indica, es permanente. Consecuentemente, ese gasto es para todos los días, por eso me permití poner el ejemplo, de que un partido político, una coalición de partidos, un frente de partidos decidiera hacer una labor más intensa en una entidad, y se le limitara el uso de sus recursos, cuando la legislación federal no lo hace.

Me parece –insisto– me he convencido, señor Presidente, yo por mí ya no podría aportar más elementos, de que no pueden hacerlo los Estados en ese sentido, lo pueden hacer exclusivamente para su proceso electoral, y para sus condiciones locales, pero no respecto del financiamiento general de los partidos políticos. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Como decía el Ministro Franco, creo que la mecánica de la discusión nos lleva a otras participaciones. También creo que el artículo 41 en su numeral 1, nos dice cuáles son los fines, las funciones, etc. de los partidos políticos, y después autoriza a los nacionales de manera

expresa a participar en las elecciones locales. Creo entonces, que esta manera que tiene de constituir la representación nacional, etc., sí les autoriza a esta posibilidad de participar en ambas; y adicionalmente, creo que el financiamiento les da la posibilidad de actuar en ambos ámbitos, como lo decía muy bien el Ministro Franco. Creo que desde mi perspectiva, el problema que estamos viendo, es que la expresión “financiamiento público estatal” que está en el artículo 44, numeral 2, se está confundiendo como si esa fuera la fuente del financiamiento y no el tope, dice, otra vez lo voy a leer: “Los recursos que un partido reciba de sus órganos nacionales para gastos ordinarios, no podrán ser mayores al 50% del financiamiento público estatal”. Una cosa es aquí, la fuente del financiamiento, y otra cosa es el tope del financiamiento, rephraseado este artículo, lo que está diciendo es que por cualquier fuente, la que sea, un partido político nacional que participe por supuesto en una elección local, no va a poder recibir más del 50% de lo que hubiere correspondido por financiamiento público.

Si vamos al artículo 46, inciso g), nos dice este artículo: “Que los partidos políticos estatales, pueden recibir de sus dirigencias, y por cualquier fuente, hasta un 99% del financiamiento público”. Ahí el tope, uno 50, y otro 99, me parece que genera esta condición de inequidad.

En segundo lugar, nos dice en el artículo 44.3: “Que durante los procesos electorales, un partido político nacional no va a poder recibir de su dirigencia recursos que signifiquen un

monto superior a la mitad del tope de gastos de campaña”. Mientras que la segunda parte del inciso g) del artículo 46, nos dice: “Asimismo, los partidos políticos –se refiere a los locales– podrán obtener con excepción de lo previsto en la fracción anterior, hasta el 99% del financiamiento tendente a la obtención del sufragio, cantidad que podrá ser utilizada bajo tales y cuales condiciones”. Ahí es donde me parece que hay –insisto– una condición de equidad.

Podría entender, y me pareció muy interesante el argumento que planteaba el Ministro Presidente en el sentido de: Se está tratando de un desarrollo de los partidos locales que suelen tener formas incipientes, en fin, de desarrollo, lo que puede ser además de ser muy pocos en el país; pero eso me parece que sí tiene una afectación directa a un problema de equidad que está planteado a mi parecer en la página cuarenta y uno a cuarenta y tres, en la síntesis que se hace en el proyecto de los conceptos de invalidez.

Creo que ahí es donde se genera esta condición –insisto– aquí, financiamiento público no es la fuente, financiamiento público, aquí es el límite de financiamiento que puede venir de otras condiciones. En otros términos, un partido político, recaudando en cualquiera de los rubros que están en el numeral 1, del artículo 44, financiamiento público, financiamiento por militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, etcétera, puede trasladar el 99%; un partido político nacional sólo puede trasladar el 50%, y

en el segundo caso hasta el 50% de los límites, y en el otro caso hasta el 99% de los límites. Esta condición tutelar que me parece muy importante en términos de generar nuevos partidos, sí encuentro que genera esta condición de inequidad señor Presidente, como hemos estado afirmando, sigo convencido de esta posición y sigo creyendo que el precepto es inconstitucional. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí la interpretación es la que usted presenta, entiendo el desajuste, pero no la veo así, es decir, para completar este 99% la dirigencia estatal de un partido político tiene también cuotas de simpatizantes, tiene donaciones en los límites permitidos, tiene las mismas posibilidades de que los candidatos puedan aportar fondos privados en la medida en que la ley lo permita, y el tope para todos es hasta el 99% del financiamiento público, sólo que un partido local para alcanzar hasta este 99% tiene que recibir los fondos directamente de estas fuentes, y la dirigencia nacional de un partido político tiene ya una ventaja, hasta un 50% que le puede mandar la dirigencia nacional. A lo mejor no le manda nada, pero tiene las mismas fuentes de provisión que los partidos políticos estatales con el tope del 99%; entonces lo sigo viendo, en mi interpretación personal, como un plus a la dirigencia estatal del partido político. ¿Estiman suficientemente discutido? No. Adelante señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Una cosa que espero sea muy breve señor Presidente. Yo

entiendo que el artículo 116, inciso g), por lo que hace a financiamiento ordinario, etcétera, de los partidos políticos, se debe referir a los partidos políticos locales y el artículo 41 es el que regula el financiamiento de los partidos políticos nacionales, porque los artículos que están impugnando y algunas de las exposiciones que he escuchado, parecería ser que se divide la dirigencia del partido y el partido político nacional, como si fueran dos cosas distintas.

El partido político nacional es uno y la dirigencia nacional es parte del partido político. Si el financiamiento de los partidos políticos, no solamente en las reglas de cómo se obtiene y de cómo se gasta, sino incluso de la vigilancia muy estricta a la que están sujetos el régimen de financiamiento de partidos políticos es federal, no veo de qué manera se puede al mismo tiempo hacer reglas locales que no se compadezcan con aquéllas.

Creo que aquí se está haciendo una distorsión, y que la Constitución se tiene que interpretar de una manera armónica, por eso considero –como ha insistido el Ministro Fernando Franco– que en este tema en específico no hay esta configuración legal de manera libre sino que el financiamiento de los partidos políticos, que no tiene que ver con gastos de campañas y precampañas, es una legislación federal la que reglamenta el precepto correspondiente del financiamiento a los partidos políticos, porque insisto, pareciera que se está dividiendo el partido; una cosa es la dirigencia, otra cosa es el partido. El partido es el mismo, es decir, el partido puede utilizar sus recursos

siempre y cuando no exceda límites de campaña y precampaña, de la manera que a él le parezca más conveniente, siempre y cuando no vulnere la Constitución y la ley federal que establecen estos aspectos.

Puede ser por razones además a veces hasta obvias, que un partido tenga interés en enfocar su gasto a aquella promoción –no de campaña sino de capacitación y gastos ordinarios– en ciertos Estados en los cuales tiene más presencia o le interesan más por lo que implican electoralmente que otros.

Insisto en que al margen del tema de equidad que sin duda también puede haber un problema en este aspecto, creo que sí hay un problema competencial que por lo menos si se dijera que no existe, requeriría una argumentación más elaborada porque sí hay un aparente, al menos si hacemos una interpretación literal, traslape entre los dos preceptos, y la forma de interpretarlos armónicamente y creo que la única forma en que funcionen los partidos políticos adecuadamente en todo lo que implica el financiamiento de los partidos, que es algo sumamente complejo en su instrumentación, en su práctica, en su vigilancia, etcétera, pues es a través de reconocer que la Constitución estableció los partidos políticos nacionales como entidades de interés social para que puedan participar en todas las elecciones no nada más en las federales, claro, las federales tendrán ciertas reglas específicas.

No pretendo y entiendo que tampoco sería la idea del Ministro Franco, decir que los partidos políticos nacionales pueden exceder los gastos de campaña o precampaña, simplemente, la forma como distribuyen sus gastos ordinarios, no creo que pueda ser regulada por los Estados, por las entidades federativas, pero además reitero, pareciera que están hablando de dos cosas diferentes: El partido político nacional, no recibe de sus dirigencias nacionales, el que recibe los recursos, el financiamiento, es el partido político como tal y lo recibe en términos de la ley federal. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente, he estado escuchando con mucha atención, por eso no había intervenido porque sí me había suscitado muchas dudas, sin embargo, después de escuchar a todos los señores Ministros, me inclino por dar mi votación al proyecto del señor Ministro Valls, ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que el artículo 44 de alguna manera está estableciendo el régimen de financiamiento de los partidos y sus modalidades y está estableciendo un tope del 50% para los gastos ordinarios y un tope de 50% además para los gastos de campaña. Se discuten tres situaciones: Una, si hay un problema competencial entre si esto está siendo algo que pertenece al legislador federal o al local. Otra, si se está interviniendo o no en la vida interna de los partidos,

y por último, si existe o no un problema de equidad dentro de la distribución de los propios partidos políticos locales.

Por lo que hace a la competencia, pues no, porque estamos precisamente en una legislación de carácter local y es precisamente el legislador local el que lo está estableciendo ¿Para qué? para sus elecciones y para la vida de sus procesos electorales.

Por otro lado, también se ha determinado que si se está interviniendo o no en la vida interna de los partidos políticos al establecer un límite, un porcentaje que bien pudiera ser más o bien pudiera ser menos, ahí yo creo que los límites se están estableciendo incluso por el propio legislador y auspiciados por la propia Constitución en el artículo 46 que es el que nos está diciendo cuáles son los límites, —46 del Código Electoral— que es el que de alguna manera no está diciendo cuáles van a ser los límites que van a tener el financiamiento de los partidos políticos para efecto de las elecciones locales.

Entonces, el hecho de que se establezca un porcentaje del 50% yo creo que no es interferir, es hasta el 50% y se está tratando de dar un principio de equidad en relación con los otros, ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, tanto para los gastos ordinarios como para los gastos de campaña, el propio artículo 46 del Código Electoral, está determinando cómo se va a integrar.

Entonces, ese 50% no es exactamente igual para todos, sino es en relación a lo que de acuerdo a su votación les corresponde, entonces por esa razón, pues creo que tampoco se rompe con un principio de equidad, y bueno, a lo mejor estoy malentendiendo la forma en que el artículo lo determina pero es la forma en que el proyecto de alguna manera está llevando esta interpretación que a mí en lo personal me parece correcta, no me parece inconstitucional porque está estableciendo un sistema que está emitiendo la autoridad competente, que se está emitiendo para autoridades locales para un financiamiento de carácter local y en relación o tratando de mantener un sistema equilibrado dentro del propio Estado.

Entonces, por esas razones yo sí me inclinaría por el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: A mí me parecen muy interesante las reflexiones que han hecho los Ministros Franco y especialmente el Ministro Zaldívar sobre la cuestión de la competencia, que se señala puede afectarse.

Sin embargo, de la acción de inconstitucionalidad planteada no advierto que se hayan hecho valer argumentos en ese sentido, tendríamos que ver de qué manera pudiéramos hacerlo, porque el punto concreto de la demanda se refiere

en estos cinco puntos a: “Violación al principio de equidad, al prohibir a un partido que reciba de los órganos nacionales recursos mayores. Violación al principio de equidad, al prohibir que un partido político reciba de sus órganos nacionales recursos en efectivo. Limitación del derecho de los partidos políticos a participar en elecciones estatales. Parcialidad. Finalmente inequidad en el otorgamiento de los financiamientos a los partidos políticos. Y violación a los principios de equidad, legalidad e imparcialidad en materia electoral”.

Entonces creo que ciñéndonos al planteamiento como está y el estudio en relación con la equidad, no le veo mayor problema y sigo en concordancia con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Suficientemente discutido, señoras y señores Ministros?

Votación nominal señor secretario, a favor o en contra de la propuesta.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: En contra de la propuesta y por la inconstitucionalidad del artículo 44, numerales 2 y 3 del Código Electoral.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: En contra del proyecto.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: En contra.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Mi voto es a favor del proyecto.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: En el mismo sentido, a favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE ORTIZ MAYAGOITIA: También estoy a favor del proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez del artículo 44, numerales 2 y 3 del Código Electoral impugnado.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: COMO RECONOCE VALIDEZ, ES DECISIÓN VÁLIDA.

Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Entiendo que es decisión definitiva en este caso señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Entonces, para anunciar que haré voto particular sobre este punto en concreto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Para solicitarle al señor Ministro Franco si me puedo sumar a su voto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con mucho gusto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Para anunciar voto particular señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Voto particular.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Es que son distintas las resoluciones.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tome nota señor secretario, y le pido al señor Ministro ponente que presente el siguiente tema.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto señor Presidente.

Es el tema número siete, que se refiere a la reducción del plazo para promover el juicio electoral, relacionado con la práctica de cómputos municipales o distritales. Este tema está contenido en el artículo 89 de la Ley de Medios de

Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila.

La consulta que someto a la consideración de ustedes, concluye que debe reconocerse la validez del artículo 89 impugnado, ya que conforme a la Norma Fundamental se desprenden tres elementos de suma importancia, éstos son: La garantía de acceso a la justicia, establecida en el artículo 17 constitucional; en segundo lugar el imperativo derivado del inciso m), de la fracción IV, del artículo 116 constitucional, para los legisladores de las entidades federativas, relativo al establecimiento de los plazos convenientes para el desahogo de las instancias impugnativas en materia electoral; y tercero, los derechos políticos del ciudadano, contemplados en el artículo 35 constitucional, consistentes en votar, ser votado y asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Sin embargo, en ningún precepto de la Constitución Federal se establece cuánto tiempo debe durar el proceso electoral local, o cuándo se debe tomar posesión de los cargos estatales respectivos, pues son los legisladores de cada entidad federativa, quienes deben establecerlo en atención a la necesidad de que todo interesado en el proceso electoral pueda hacer valer sus derechos, de que se garantice el acceso a la justicia a través de un sistema de medios de impugnación, así como su pronta impartición, atendiendo a la naturaleza de los procesos electorales, aspectos que no transgrede el artículo 89 que se impugna.

Aunado a lo anterior, del análisis del procedimiento legislativo que dio origen a la reforma impugnada, se advierte que la reducción del plazo para promover el juicio electoral relacionado con la práctica de cómputos de cuatro a tres días, se hizo con la finalidad de armonizar los plazos establecidos en la ley de la materia para la presentación de los distintos medios de impugnación que en ella se prevén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del propio ordenamiento. Propuesta que dejo a la consideración de las señoras y de los señores Ministros. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A consideración del Pleno este tema, señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Estoy de acuerdo con el sentido pero no con las razones. En la página doscientos ochenta y dos del proyecto se cita una tesis del año dos mil uno, en la cual se dan distintos argumentos y eso conduce después, en la página doscientos ochenta y cinco, en el segundo párrafo, a decir básicamente que el legislador local tiene una libertad de configuración en los plazos convenientes para la presentación y desahogo de las instancias, etcétera, y después como lo acaba de decir el señor Ministro Valls, porque se logra una concordancia entre el artículo 23 y el artículo 89.

Sin embargo, hay una tesis que aprobamos específicamente en la Acción de Institucionalidad 21/2009,

el veinticinco de agosto de ese año, por mayoría de ocho votos, en la cual se ven dos temas que me parece que son los que deben determinar el criterio en este caso, estoy leyendo la parte final de la tesis, leo el rubro: “INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS JUICIOS Y RECURSOS RELATIVOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO EFECTIVO A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA”. Y después cito: “Deben permitir que el órgano jurisdiccional local resuelva con oportunidad las impugnaciones planteadas con la finalidad de que en su caso pueda conocer en última instancia la autoridad jurisdiccional federal; por tanto, los plazos otorgados para la presentación de los medios de impugnación sólo pueden acotarse a la medida que no provoquen un menoscabo a los derechos de los justificables o a la armonía del sistema electoral en el que se encuentren inmersos, así como al principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales siempre que se garantice que quienes pudieran estimar vulnerados sus derechos por un acto o resolución de autoridad electoral puedan acudir a los medios de defensa atinentes”.

Creo que esta argumentación es mucho más precisa, creo que la modificación al artículo 89 satisface este criterio y me parece que quedaría mejor resuelto el asunto señor Presidente, sería una propuesta al señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto señor Presidente, ponderaré lo que nos ha señalado el señor Ministro Cossío para hacer la inclusión de la tesis a la que él se refirió. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. Coincido también plenamente con lo dicho por el señor Ministro Cossío, que ya aceptó ahora el señor Ministro ponente, más que nada en lo que se refiere a determinar que esos plazos son los idóneos para poder ser impugnables.

Y en el caso concreto de los cómputos, nada más señalar que el artículo 78 del propio Código Electoral, está referido a cuándo estos cómputos sean válidos, definitivos e inatacables; eso es lo que hace que el plazo correspondiente tenga la posibilidad de impugnación; entonces si le agregara eso estaría totalmente de acuerdo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ya dijo que sí el señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto.
¡Claro que sí!

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Perdón señor Presidente, creo que hay una adicional, estoy

de acuerdo con el proyecto, en que al parecer es el artículo 23 el que establece los plazos, el artículo 89 sólo establece cómo se van a computar; entonces, de hecho el plazo de tres días está consentido de la manera como se computa, pues es una manera normal, prácticamente de todos los códigos procesales; entonces, si se pudiera adicionar o agregar un pequeño párrafo con esto, si es que están de acuerdo, creo que estaría bien. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Por supuesto que sí, muchas gracias por la sugerencia señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Alguien más? Consulto si alguien votaría en contra de esta parte del proyecto; no habiendo nadie en contra, con las modificaciones que ya ha aceptado el señor Ministro ponente, ¿consulto al Pleno voto aprobatorio para esta parte del proyecto? **(VOTACIÓN FAVORABLE)**. Informe señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en reconocer la validez del artículo 89 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro ponente, le pido que presente el siguiente tema.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto señor Presidente. Es el tema número ocho, referido al establecimiento de un período de –así lo llama– veda electoral de más de tres meses entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas; esto se contiene en el artículo 134 del Código Electoral de Coahuila.

En el proyecto propongo reconocer la validez de dicho artículo impugnado, ya que cumple con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos i) y j), constitucional, pues por una parte garantiza que los partidos políticos durante los procesos de selección interna de sus candidatos, accedan a la radio y la televisión conforme a las reglas que se establecen en el artículo 41, Base III, apartado b, de la propia Constitución, y por otra, fija las reglas para las precampañas electorales en Coahuila, así como las sanciones para quienes las infrinjan.

En este sentido, el argumento de los promoventes en el que manifiestan que en la norma impugnada se prevé un período de veda electoral de más de tres meses entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, resulta infundado, pues en los preceptos constitucionales que se estiman violados no se establece disposición alguna relacionada con el período de intercampañas, esto es, el tiempo que debe mediar entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, sino únicamente con la duración de las precampañas y campañas electorales; por lo que queda a disposición de las legislaturas locales, la fijación

del plazo que estimen conveniente en este aspecto, siempre y cuando respeten los tiempos que se establecen en la Constitución Federal para la duración de las campañas y precampañas, lo que se satisface desde mi punto de vista en el caso que analizamos.

Por otro lado, en relación con la violación aducida respecto del artículo 41, Base III, apartado b, incisos b) y c), constitucional, en el sentido de que con el establecimiento del plazo de más de tres meses entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, se invaden los tiempos que corresponden al Estado en materia de radio y televisión, pues el IFE, encargado de administrar estos tiempos en las entidades federativas, podrá disponer de los mismos para emitir los spots de los partidos políticos; debe señalarse al respecto, que los accionantes no formulan argumento alguno tendente a demostrar de qué forma se invaden estos tiempos y por el contrario, en el numeral 4 del propio precepto impugnado, se remite a lo dispuesto en la Constitución Federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Código Electoral local, para asegurar que el derecho de los partidos políticos al uso de los tiempos en radio y televisión para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos, no interfiera con los tiempos que correspondan al Estado en esta materia, de conformidad con las reglas y pautas que determine el IFE, al que corresponde administrar estos tiempos. De igual manera, se desestima el argumento de los promoventes en el que manifiestan que el período de

intercampañas de más de tres meses que se prevé en el artículo impugnado, genera incertidumbre y puede prestarse a la realización de actos anticipados de campaña; y lo que resulta aún más grave, tratándose, dicen, de funcionarios públicos o representantes populares que pretendan postularse para algún cargo de elección popular, dado que pueden valerse e indirectamente señalan, de la realización de programas sociales para beneficio de su candidatura. Estos planteamientos son meras especulaciones que no pueden dar lugar a la declaración de invalidez del precepto que se combate; además, respecto de ello, el artículo 134 de la Constitución Federal, prevé reglas a las que en todo caso deben sujetarse los funcionarios o servidores públicos. Este es el tema que someto a su consideración. Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A consideración del Pleno este tema.

Si no hay participaciones, ¿consulto si alguno de los señores Ministros estaría en contra de esto? Señora Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: No estoy en contra señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ya me había dicho que no había participación pero muy bien señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Nada más quería mencionar una situación, lo que se dice en los conceptos de

invalidez respecto de ese *impasse* que se da entre que se inicia el proceso electoral y en lo que llega la jornada electoral, y el registro de las precampañas, pues sí se da un *impasse* mínimo de dos meses, puede llegar a ser hasta tres, eso es totalmente cierto, pero bueno, no veo que esto afecte algún artículo constitucional.

Ahora, de que se da ese tiempo, es verdad; que eventualmente puede darse alguna situación de carácter social por parte de las autoridades, también es cierto, pero eso ya será aplicación, ya no es problema de constitucionalidad, de orden fáctico.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Así se contesta, que es de orden fáctico.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente, gracias, nada más eso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Si nadie está en contra de esta parte del proyecto, de manera económica les pido voto aprobatorio. **(VOTACIÓN FAVORABLE)** Informe señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en reconocer la validez del artículo 134 del Código Electoral del Estado de Coahuila.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pasamos al siguiente tema señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto señor Presidente, es el tema número 9, que se refiere a la limitación que se establece para que en el supuesto de que el elector marque dos o más recuadros y exista candidatura común, el voto sólo cuente para el candidato, y no para los partidos políticos que lo hubiesen postulado. Esto está contenido en los artículos 192, numeral 3, y 194, numeral 2 del Código Electoral de Coahuila.

En el proyecto propongo reconocer validez de los preceptos impugnados, relacionados con el cómputo de los votos que se realiza en cada casilla durante la jornada electoral, pues considero que el promovente parte de una premisa inexacta derivada de la lectura aislada de los artículos 192, numeral 3, y 194, numeral 2 del Código Electoral de Coahuila, que regulan el escrutinio y cómputo en la casilla, dejando de lado lo dispuesto en el artículo 63 del propio Código, en el que se prevén propiamente las disposiciones relativas a las candidaturas comunes.

En efecto, si hacemos una interpretación sistemática de lo dispuesto en los referidos artículos, llegamos a la conclusión de que si bien al momento de computar los votos en las casillas, éstos se asignarán al candidato respectivo para efectos de determinar la representación de cada partido y asignar el financiamiento público que corresponda, los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos

políticos que los hayan obtenido, además de sumarse a favor del candidato. Propuesta que estoy sometiendo a la consideración de ustedes. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A consideración del Pleno. Señor Ministro Fernando Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor Presidente. Tengo muchas dudas, de hecho en principio estoy en contra del proyecto y voy a explicar por qué.

Efectivamente se hace un esfuerzo para salvar el problema que nos plantean en esta acción de inconstitucionalidad, y me voy a permitir leer primero los artículos 192 en su parte correspondiente, y el 194, y luego ir al 63, con el cual se pretende salvar el problema.

El artículo 192 dice: “El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan y viene enumerando lo que se hace, por eso es escrutinio y cómputo. Y luego dice: “Son votos nulos: a) El expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y b.- Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir candidatura común entre los partidos políticos cuyos emblemas hayan sido marcados; cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista candidatura común entre los partidos políticos cuyos emblemas hayan

sido marcados, el voto contará para el candidato”. Esta es la impugnación.

Aquí dice: Y los partidos políticos nos quedamos fuera de esto. No, porque es exclusivamente.

Esto mismo se repite en el artículo 194, el proyecto dice: Es que esto hay que verlo a la luz del artículo 63, que es la forma en que está regulada la candidatura común.

Este Pleno ya se ha pronunciado en que es libre configuración de los Estados mantener las candidaturas comunes o no.

Consecuentemente, ese no creo que sea tema en este caso. Las candidaturas comunes suelen ser formas de asociación entre partidos políticos en donde, o no hay requisitos, o hay muy pocos requisitos, a diferencia de las coaliciones. Esto es importante tenerlo presente. En este Estado hay, por un lado la coalición, y por el otro lado la posibilidad de la candidatura común, pero la candidatura común se sujeta a ciertos requisitos, que son los que establece el artículo 63. El 63, dice: “Dos o más partidos políticos pueden postular al mismo candidato o candidatos, lista, fórmula o plantilla, debiendo cumplir con lo siguiente: - establece ciertos requisitos como son:- presentar por escrito la aceptación a la candidatura del ciudadano a postular y presentar -esto es muy importante- presentar el convenio certificado por notario público de los partidos postulantes y el candidato, en los términos establecidos en

sus estatutos, en donde se indiquen las aportaciones de cada uno para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de radio y televisión que fije el Instituto Federal, así como a los topes de gastos de precampaña y campaña electorales fijados en este código”.

Y el Punto Tres, —el Punto Dos, simplemente dice que se deberá presentar el convenio ante la autoridad—. El Punto Tres, es el que se utiliza para tratar de salvar el concepto de invalidez, dice: “Los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos que los haya obtenido, y se sumarán a favor del candidato”. ¿Qué es lo que sucede? Esto en realidad no salva el problema que están diciendo; quiere decir que cuando efectivamente se marcó el emblema de un partido político, se computa para el candidato y para el partido político, de otra manera es nulo el voto para los partidos políticos. El proyecto, y aquí es donde creo que no se salva y además complica un poco, en mi opinión y con todo respeto, dice: “Bueno, es que entonces el voto cuenta para el candidato y los partidos políticos”. Esto no puede ser, sería un doble voto; es decir, el voto de un elector tendría el efecto de dos partidos que se benefician de ese voto, y esto tiene repercusiones, en función del financiamiento, en función del acceso a medios; consecuentemente, a mí me parece que no se puede salvar la inconstitucionalidad. Se hubiera salvado, en mi opinión, si en la parte que habla del convenio, se hubiera dicho: los partidos políticos en su caso, tendrán que señalar si se da el supuesto de tal precepto, a qué partido político le

corresponde, como está en muchos otros códigos; al no haberlo, me parece que no podemos y no debemos salvar este problema, porque sí requiere una precisión, dado que si no, efectivamente, si nada más cuenta para el candidato, también sería injusto para los partidos políticos que lo han postulado, el no poderse beneficiar de este voto. Por estas razones yo estaría en este momento en contra del proyecto, salvo que hubiera alguna razón que yo no hubiera considerado. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Perdón señor Ministro, pero la literalidad de la norma parece clara en que sólo cuenta para el candidato y no para los partidos políticos, a ninguno, y eso es lo que estamos nosotros calificando.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Sí, pero me refiero a que el proyecto lo salva con una interpretación a la luz del 63, o sea que en ambos casos, Presidente el precepto, quiero precisarlo, resulta inválido, ¿por qué? Porque el voto debe contar no nada más para el candidato, sino para un partido político, porque el voto tiene efectos múltiples, cuenta para determinar quién gana la elección, pero también tiene otra serie de efectos respecto de los partidos políticos; al no estar previsto esto, que es lo que se alega en el concepto de invalidez, se pierde el voto a favor del partido político, de cualquiera de ellos. Entonces, tan resulta, en mi opinión inválido, que no se establezca una norma que señale claramente el efecto de ese voto, a qué partido político puede corresponder, como el hecho de que pudiera, en la interpretación que hace el proyecto, que

entiendo que fue para salvar los preceptos, pudiera contar para dos o más partidos políticos, lo cual, en mi opinión es absolutamente inadmisibile.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No, no puede contar para los dos partidos, la ley dice que no cuenta para ninguno. Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Pero eso lo dice el artículo 63, que no está impugnado; el que dice que van a contar para los dos partidos, lo dice el artículo 63: “Los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos que los hayan obtenido”. El 63 es el que dice que se contarán para los dos partidos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No, no, para el partido que los haya obtenido.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Por eso, si son dos los partidos, se contará uno para cada uno.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No, con un solo votante, con un solo ciudadano no se pueden obtener dos.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Pero esto es en todo caso un defecto del 63, que no está impugnado.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Creo que vale la pena releer el proyecto en la página trescientos nueve, -es decir, después de haber incorporado como decía el Ministro

Franco, bajo el título de interpretación sistemática, el artículo 63, dice: “De lo anterior se advierte que el promovente parte de una premisa inexacta, derivado de la lectura aislada de los artículos 192, numeral 3 y 194, numeral 2, del Código Electoral del Estado, que regulan el escrutinio y cómputo en la casilla, que deja de lado lo dispuesto por el artículo 63 del propio código” en el que se prevén propiamente las disposiciones relativas a las candidaturas comunes.

En efecto, de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los referidos artículos, se llega a la conclusión de que si bien, al momento de computar los votos en las casillas, éstos se asignarán al candidato respectivo para efectos de determinar la representación de cada partido y asignar el financiamiento público correspondiente, los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos que los hayan obtenido, además de sumarse a favor del candidato. Esto es lo que me parece decía.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, porque le está dando doble valor a un solo voto.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Pues sí.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bueno, en realidad siempre contará para el candidato y para un partido. Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Insisto, los artículos impugnados, hacen que el voto se cuente para el candidato.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Nada más.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: No se considerará nulo, que es la generalidad de estos artículos, la nulidad; se cuenta para el candidato. Si eso trae como efecto que se está computando doble para los partidos o no se computara para los partidos, eso es algo que aquí en estos artículos impugnados, no está; de tal manera que del análisis que hago de estos 192 y 194, no se da ese problema por sí mismo, sino sólo en relación con el 63 que no está impugnado.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente. Coincido con lo que ha manifestado el Ministro Franco y también con la preocupación que ahora hace valer el señor Ministro Luis María Aguilar; aquí el problema es que el precepto impugnado, efectivamente, prácticamente quita cualquier valor del voto a los partidos, lo que me parece que es inconstitucional claramente.

Para salvar la inconstitucionalidad, el proyecto remite a otro precepto, al 63 que no está impugnado y de que su interpretación literal nos llevaría al otro extremo, que un voto cuenta varias veces. Creo que quizás lo correcto sería

declarar la invalidez del precepto impugnado y no pronunciarnos por cuál debe ser la interpretación del 63 que no está impugnado, o ya veremos cómo, en su caso, el Instituto Electoral local lo interpreta, cómo computa estos votos, porque sí estaría cuestionable, lo entiendo, referirnos a la inconstitucionalidad de un precepto no impugnado, pero si vamos a tomar como parámetro de constitucionalidad un precepto no impugnado, cuya interpretación tampoco nos satisface, creo que estaríamos también en una especie de círculo vicioso; por eso, reitero, creo que quizás, lo sano, si es que la mayoría acepta, que este precepto, el que está impugnado es inconstitucional, y simplemente declarar la invalidez y no pronunciarnos sobre el diverso 63. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tengo duda en esto. Lo natural, lo lógico es que el voto cuenta para el candidato y para el partido, pero hay ciudadanos que votan por un candidato distinto de los que se establecen en la boleta electoral, y para este candidato no registrado, no propuesto, lo que pasa es esto, estoy comentando el principio que sostiene toda la argumentación del señor Ministro Fernando Franco; no puede contar el voto nada más para el candidato, y pienso que sí, porque en mi Estado, en Veracruz, hubo un suceso extraordinario, donde la población mayoritariamente votó por una persona que no estaba registrada como candidato, entonces todos estos votos no contaron para los partidos políticos y no sé si algún

ciudadano pudiera decir “voto nada más por el candidato, pero no por el partido”.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Es que aquí, perdón señor Presidente, aquí el supuesto es diferente, aquí es una candidatura común, donde se marca el cuadro de dos o más partidos que forman esta asociación para la candidatura.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No, no hay asociación, no, es que ese es el problema, si hubiera asociación es coalición.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Bueno, asociación entre comillas, es decir, este acuerdo que hubo para una candidatura común se marcan varios partidos; entonces, de repente lo que dice la ley en el precepto impugnado es: No se van a contar los votos para los partidos, solamente para el candidato.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí porque ¿Qué pasa? Dos siglas y colores diferentes aparecen en la boleta, pero el mismo nombre del candidato. Dos partidos de manera autónoma sostienen una candidatura común; entonces en la boleta voy a encontrar dos siglas partidistas y repetido el nombre del candidato. No hay duda de que el voto fue para el candidato, en esto no hay duda, la duda es ¿Por cuál de los partidos que postulan al mismo candidato quiso votar el ciudadano cuando marcó los dos? Entonces, la solución que da la ley –en lo personal– me parece buena. No hay

duda alguna de que fue un partido político el que sostuvo la candidatura, no hay duda alguna de que un ciudadano votó a favor de ese candidato, la duda es ¿Por cuál de los dos partidos políticos emitió el voto? Como marcó los dos, se invalida el voto para los partidos no para el candidato, esa es la solución que da la ley, a mí en lo personal me parece correcta. Señor Ministro Valls y luego el señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Sí, solamente para hacer una precisión: Estos artículos impugnados el 192 y el 194, se están refiriendo al escrutinio y cómputo en la casilla, a eso exclusivamente se refieren. El artículo 63 regula las candidaturas comunes y sus efectos, y como ya lo decía el Ministro Aguilar Morales, no fue impugnado, el 63 no está impugnado, los que están impugnados son el 192 y el 194. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Tampoco encuentro ¿Por qué serían inválidos el 192 y el 194? Me parece que lo que confunde mucho es la manera en la que el proyecto ataca el problema, estableciendo una respuesta que le llama sistemática. Creo que la respuesta es mucho más simple, la que hacía el Ministro Aguilar, si al final de cuentas ¿Qué me estás impugnando? El 192 y el 193, y vayamos a la página trescientos dos donde dice: “Se limita el derecho a los partidos políticos que decidan contender bajo la modalidad de candidatura común” la respuesta es: Allí no

se te está limitando ¿Por qué razón? Porque precisamente estos artículos están en la modalidad específica del cómputo. ¿Cómo se te va a limitar allí? No encontraría –así los dos analizados– ¿Contra qué es inconstitucional? Si se elimina esa parte, la sistemática, creo que sale y –como decía creo que el Ministro Zaldívar– que se reconfigure ahí abajo, pues ellos ya verán si en otra acción o ya verán cuándo, pero no estemos como oficiosos aquí. Creo que el sistema con eso podría soportarse, me parece.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Ya se dijo lo que yo estaba por expresar, entre el Ministro Presidente y el Ministro Cossío. Exactamente, pienso que en este caso ni soluciona el artículo 63 el problema ni es materia de análisis, lo complica, y el “sólo contará para el candidato” a qué se refiere el 192, por sí mismo no tiene ninguna complicación más que en la forma de hacer el escrutinio de los votos. En ese sentido estaría de acuerdo con el proyecto si se eliminara, como ya se ha dicho, la cuestión del 63.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Fernando Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor Presidente. Parece que todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar lo del 63, y que confunde más que solucionar, eso está saldado.

Ahora, quisiera entender ¿Cuál es el razonamiento? Es decir, el razonamiento es que es válido que si se marcan dos o más emblemas de los partidos políticos, el voto es – entiendo que lo que se está diciendo– el voto es válido para el candidato y es nulo para los partidos políticos, no contaría para los partidos políticos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Es una modalidad de que no anula, pero no cuenta.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: O sea, le damos una validez parcial al voto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Exactamente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: No sé si vaya a haber otros argumentos, lo quiero reflexionar Presidente, porque realmente el sistema es otro y está construido sobre otras bases.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: El sistema es otro, y el 63 es el que registra el sistema. El voto cuenta para el partido por el cual se cruzó el nombre del candidato común, pero aquí es un caso excepcional donde el ciudadano al emitir su voto, marca dos veces.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Marca varios.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Dos o más veces.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Dos o más veces.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, de los que sostengan al mismo candidato. ¿Quiere decirnos algo el señor Ministro Valls?

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Sí, solamente para manifestar que me parece muy razonable y muy razonada la propuesta del Ministro Cossío y la acepto, de suprimir lo referente al artículo 63, muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente, yo creo que no es un supuesto tan excepcional, creo que es un supuesto que se puede dar con mucha frecuencia, precisamente por lo que decía el señor Ministro Presidente, se busca el nombre y se marcan los logotipos de los partidos, aquí el punto es que con un sistema de partidos como tenemos, me parece que se está distorsionando al darle una validez parcial al voto, estamos nosotros presumiendo que quien votó así, está votando por el candidato y no por los partidos, cuando puede ser que está votando porque no tiene el conocimiento necesario para saber que basta con que señale un logotipo, en fin, creo que meternos a tratar de suplir qué está pensando cada votante es un poco complicado.

Lo único que reflexiono es que me parece que sí hay aquí una cuestión que distorsiona el sistema y que puede llegar

a distorsionar porcentajes que tienen que ver para otros efectos; obviamente al candidato se le va a computar y si gana, de todas maneras gana, pero como ya se dijo aquí el voto tiene diferentes funciones y tiene validez para algunas otras cuestiones, a veces para reparto proporcional, a veces para financiamiento, en fin, yo creo que nuestro sistema constitucional está diseñado como un sistema de partidos, ya es otro debate es de las candidaturas independientes o no, pero aquí no estamos hablando el tema de una candidatura independiente, sino de una candidatura común, ¿Con qué racionalidad vamos a quitarle a los partidos este voto? Hay algunas soluciones que se pueden dar: Legislativa, de que se distribuyan proporcionalmente de acuerdo a los porcentajes, puede ser lo que decía el Ministro Franco, que se establezcan determinados convenios, pero lo que sí me parece es que así como el hecho de que se les sume a todos me parece incorrecto, también me parece incorrecto que simple y sencillamente el legislador tome la decisión de que el voto no cuenta para los partidos políticos, no obstante que el elector señaló la casilla de dos o más partidos. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente, por principio de cuentas estamos en presencia de una candidatura común. El artículo 192 lo que está diciendo es: bueno y le preguntaba al señor Ministro Franco, ¿Cómo vendría la boleta electoral, viene un nombre del candidato y aparte vienen los emblemas de los partidos

políticos? ¿Entonces qué sucedió? Que le marcaron al candidato y marcaron además a los dos o tres partidos políticos que estaban postulando; entonces, ahí tendrían que haberle marcado nada más al candidato y a un solo partido; sin embargo, se fueron marcando de más; entonces, lo que están estableciendo los artículos es: No se pierde el voto para el candidato, y eso nos queda clarísimo, pero lo que nos vienen impugnando en realidad no es el problema del candidato; si nosotros vemos en la página trescientos dos, lo que les afecta a los promoventes de la acción, es que se limite el derecho de los partidos políticos a que decidan contender bajo la modalidad de candidatura común, a que les sean asignados los votos que hubiesen obtenido y con ello, les sea otorgado el financiamiento público, que les permita cumplir sus fines, yo creo que el proyecto no contesta esto, el proyecto se va más bien a que es correcto que se le reconozca al candidato y en todo caso a los partidos políticos conforme al 63, pues se le sume al que corresponda; entonces creo que no está contestando lo que en realidad se está planteando en el concepto de invalidez, el concepto de invalidez, el concepto de invalidez lo que está diciendo es: A mí no me importa que le des el voto al candidato, eso me quedó clarísimo, a mí lo que no me gusta es que me quites los votos a mi, partido político y eso es lo que realmente no se analiza y el 63 no lo está resolviendo, ¿Qué es lo que en todo momento podría resolver? Un convenio, para saber, en todo caso, en el convenio a quién se le va a aplicar ese voto, pero eso no se está manifestando en el proyecto, y finalmente el artículo no

lo está resolviendo, ni el 63, ni el 194, que es el que se refiere a los partidos políticos.

Entonces por esa razón, creo que es el argumento del Ministro Franco, en el sentido de que sí se le está vedando al partido político la posibilidad de que tenga un voto que ha sido tachado doblemente, cuando no se está especificando realmente a quién le corresponde y que esto sí va a influir de manera específica en el financiamiento público, porque para ello sí cuenta cuántos votos tuvieron en la cantidad de financiamiento que van a obtener o si no lo van a obtener, pueden perder hasta el registro. Entonces creo que esto es lo que se tiene que contestar y en mi opinión, pues sí podría dar lugar a la inconstitucionalidad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Sánchez Cordero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias Ministro Presidente. A mí me parece que en primer lugar, el artículo 63, no lo resuelve. En segundo lugar, me parece que es correcto tanto el artículo 162, en el inciso 3), como el 194, en el inciso 2). Porqué me parece correcto. Porque efectivamente se está asignando el voto al candidato, al candidato respectivo, no al partido político y dice el Ministro Franco, bueno, no sé si él en ley pretenda que debe establecerse que en los convenios cuando exista candidatura común deberán asignarse los porcentajes a los partidos políticos en ley, que se establezca esta obligación en los convenios, porque de otra suerte, pues el convenio

es un acuerdo entre los partidos políticos. Entonces, creo que así se resuelve correctamente el tema.

Por otro lado, recuerdo una elección aquí en el Distrito Federal de alguna delegación hace ya varios años, en el sentido que fue un problema terrible cuando aparecieron cruzados más de uno de los respectivos emblemas cuando se designaba a un solo candidato. De hecho, inclusive, se computaron varias veces a ese mismo candidato los votos, no se sabía en qué forma se iba a distribuir el porcentaje a los diversos partidos políticos que tenían esta candidatura común.

Siento que en este caso está resuelto por estos dos artículos y que si bien en el convenio pudiese establecerse algún tipo de asignación, bueno, ya será otra situación. Estaría de acuerdo con el proyecto en estos términos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Es que son dos cosas, creo yo, según lo percibo. Una cosa es la validez del voto que está en el 192 y 194, si es o no nulo el voto que se haga de esta manera. Aquí estos artículos lo resuelven diciendo que el voto, aunque se hayan trazado dos marcas de partidos, se asignará al candidato. Eso es a lo que se refieren estos dos artículos, y no veo que esto signifique que le estemos quitando al partido ningún voto. Nosotros,

en la interpretación de estos dos artículos, que no se refieren a los partidos, se refieren al escrutinio de los votos.

Ahora, el artículo 63, que es el que se refiere a eso, lejos de quitárselo a los partidos, parece ser que se los otorga a los dos. Bueno, pero no importa, bien o mal hecho o quitándoselo o no, ese artículo 63, ya lo hemos dicho aquí, no está impugnado, es parte del sistema que pudiera perfeccionarse, como sugieren la Ministra Luna, la Ministra Sánchez Cordero, que están necesitados de hacer convenios u otras cosas, pero eso es parte de un sistema que no está a discusión ahorita.

Lo que los artículos 192 y 194 señalan, es que el voto, lejos de ser nulo cuando suceda eso, se le asignará al candidato y hasta ahí. Más allá sobre si se le quita o no a los partidos o si se le otorga doble o nada, eso es una cuestión que es parte del sistema que no está impugnado. Por eso, para mí, estos dos artículos en sí mismos, no tienen ese vicio de inconstitucionalidad, porque no pueden tener el quitarle a los partidos lo que los artículos no dicen que están quitando, aunque sólo diga el 192, en la expresión sólo contará para el candidato ¡claro! respecto del candidato, porque se está haciendo el escrutinio, y nada más.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Como todos sabemos, en el caso de las coaliciones, sí hay que presentar, y lo decía el Ministro

Franco, un convenio. El artículo 60, numeral 1, inciso g), establece las modalidades de distribución, etcétera. A diferencia de eso, también la legislación de este Estado tiene fusiones y candidaturas comunes, y el problema es que efectivamente no se establece un convenio, y no se sabe cómo asignar. El problema entonces es que es un convenio, pero para financiamiento, no para distribución de votos, tiene razón el Ministro Franco, sólo es para financiamiento, y cómo van a aportar y cómo van a recibir financiamiento.

El problema aquí me parece es el de una sustitución psicológica. Vamos a suponer que fuera en la candidatura común, un partido A, un partido B, y evidentemente un candidato que a ambos les parece interesante. En este sentido el problema está, en que sabiendo que existe esta forma de expedir la votación, ¿a quién se le asigna?

Hay una tesis, que me pareció muy interesante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió el trece de junio de dos mil nueve, evidentemente, no nos vincula, pero sí me parece que expone razones muy interesantes en el sentido de que hay que llevar a cabo un análisis, o hay que llevar a cabo una asignación psicológica o presuponer que el elector está manifestándose por el candidato, no por el partido político, y consecuentemente con ello asignarle sólo el voto al candidato.

Creo que al final de cuentas lo que tenemos es un problema de una distorsión, si tengo dos, el asunto es cómo corregimos de mejor manera la distorsión, primero, y, segundo, si efectivamente esa corrección de la distorsión que se da por el hecho fáctico de no tener un convenio de distribución de porcentajes, encontrarse con que hay dos casillas marcadas, y un solo sujeto al que se refiere, algo tenemos que hacer. Le asignamos a los tres, al candidato al partido A, y al partido B, le asignamos sólo a un partido, le asignamos sólo al candidato, es decir, al final de cuentas hay una distorsión en este sentido.

La forma en la que el Tribunal lo hace es imaginando sólo una voluntad, o un sentido psicológico en el votante, y decir: como sólo el votante es el que manifiesta, y el votante quiso expresarse por un candidato y no por los partidos, llevo a cabo esa asignación en este mismo sentido, y es como al final de cuentas resuelve el caso, creo que es una buena resolución para el Estado de Sonora dice, y para otros similares. Tengo la impresión que también en este mismo sentido se pueden estar conformando algunas otras soluciones.

A dónde llego yo al final. ¿Cuál es la razón final y de constitucionalidad para suponer que estos dos preceptos impugnados, y sólo los impugnados 192 y 194 serían inconstitucionales? Al final de cuentas qué es lo que genera: ¿Una disminución de la representatividad, una afectación al principio democrático, una afectación al partido político?, ahí es donde francamente no la encuentro.

Traer el artículo 63, como decía al final de su exposición el Ministro Aguilar, sí resulta un tanto cuanto oficioso, creo que en este sentido jalar otro artículo para el final de cuentas determinar su inconstitucionalidad, a mí no me queda de verdad claro.

Creo que al final del día, lo que se está planteando aquí es más que un problema donde nos podríamos pronunciar sobre el fondo, es un problema técnico, es decir: ¿Qué tengo, una impugnación del 192 y 194? Bueno, pues en esos dos, en lo personal insisto, no encuentro, y todavía no la he escuchado, ¿cuál es la razón dura de inconstitucionalidad? ¿Qué principio, qué derecho fundamental se está afectando, o qué elemento de la democracia están afectando, como para declarar la inconstitucionalidad de esos dos?

El Ministro Valls ya nos dijo que va a eliminar el estudio del artículo 63, creo que con eso el proyecto se sostiene, y no es necesario a mi parecer, a menos de que apareciera una razón de inconstitucionalidad clara de los dos preceptos 192 y 194, que no la encuentro señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Silva Meza.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Gracias Presidente, declino porque prácticamente mi orientación era en el sentido del Ministro Aguilar, respecto de sí jalar el 63, porque siento que es lo que le da sentido a todo. En el 192,

en los preceptos en relación con los candidatos, parece que es muy claro, pero ya la fórmula en función de partidos en el 63 sí la podríamos vincular, pero me quedo aquí estacionado en función también de lo que se acaba de decir, un argumento fuerte de inconstitucionalidad, pues habría que encontrarlo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Sí señor Presidente. Creo que efectivamente es un problema de ópticas, no acabo de entender dentro del sistema, no estamos hablando de candidaturas independientes, tenemos un sistema en donde la postulación del candidato es por partido político. Aquí es una figura que viene desde 1946 en nuestro sistema electoral, en que dos o más partidos políticos, sin mayores requisitos o con requisitos mínimos, pueden postular al mismo candidato.

A mí me parece que aquí hay dos aspectos: El primero es si dentro de este sistema –que es de lo que se duele el Partido del Trabajo, que es el que impugna esto– los deja en total estado de indefensión frente a una decisión legislativa, inclusive habla del problema a que se enfrenta con los electores; entonces, lo que dice es: están sancionando –no lo dice así, estoy tratando de sumarizar– están sancionando la candidatura común. ¿Por qué? Porque el error del elector, que evidentemente hay un problema, pues yo no diría psicológico sino de saber exactamente qué quiso el elector, el error del elector me va

a perjudicar a mí, partido político, consecuentemente esto va en contra de la posibilidad de que yo vaya a las candidaturas comunes ante esta situación. Entonces, evidentemente si hay una mayoría a favor de que esto es constitucional el proyecto se tendría que reconstituir para darle respuesta a lo efectivamente planteado.

Honestamente no veo cómo podemos –ese es mi cuestionamiento y dije que iba a reflexionarlo y me estoy posicionando– cómo podemos dentro de un sistema –no lo podemos ver aislado–, dentro de un sistema electoral en donde son los partidos políticos los que postulan –no hay candidaturas independientes– dividir el efecto del voto, y de lo que se quejan los partidos es: “No le das solución a esto y no me das oportunidad además.”

Consecuentemente, me confirmo en que el sistema en sí mismo y los preceptos, resultan o deben declararse inválidos para que se permita que ante una situación de hecho que puede generar el que haya dos o más emblemas de partidos políticos puedan tener la solución que el voto dentro del sistema electoral que tenemos establecido pueda contar tanto para el candidato como para uno de los por lo menos, uno de los partidos políticos, por el cual fue postulado. Consecuentemente, si no, tendríamos que exigirle a los Institutos Electorales de que capaciten debidamente a todo el electorado de cómo puede tener efectos su voto o no tener efectos su voto. Por esas razones seguiré considerando que dentro del sistema estos preceptos resultan inválidos. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. Tratando otra vez de retomar los argumentos que ya se han mencionado, efectivamente, el concepto de invalidez está referido a que se está privando al partido político de la posibilidad de que se le compute un voto para efectos de financiamiento.

Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 192? El artículo 192 está referido al escrutinio y cómputo del procedimiento, y luego en su Apartado 2, nos está diciendo cuáles son los votos nulos. Entonces, dice: “Voto nulo es aquél en que el elector no marca ninguna casilla; voto nulo es aquél en que el elector marca dos o más cuadros sin existir candidatura común.” O sea, si no marcas es nulo, si marcas de más, también es nulo si no hay candidatura común.

Y luego dice en el 3, que es el combatido: “Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista candidatura común entre los partidos políticos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto sólo contará para el candidato.” Entonces, aquí definitivamente no puede haber inconstitucionalidad y además está referido al concepto de invalidez, un poco en la línea de lo que decía el Ministro Luis María Aguilar, en relación con este artículo el concepto de invalidez sería inoperante, no está referido para nada a los partidos políticos, simplemente está señalando cuáles son los votos nulos, está diciendo: El que

marca de más, el que marca de menos, siempre y cuando no haya candidatura común.

Y luego la excepción es: Cuando hay candidatura común, si te fuiste de más entonces el voto va a contar para el candidato; entonces, ese voto no va a ser nulo, es lo que está determinando el artículo. Si el concepto de invalidez está referido a que el partido político está perdiendo un voto para efectos de financiamiento, pues no veo la relación, ahí sería inoperante el concepto de invalidez en relación con este artículo que no tiene una relación específica con el partido político.

Ahora, vamos con el otro artículo. El otro artículo es el 194. El 194 también está referido al acta de escrutinio y cómputo de la elección y da las reglas que son las siguientes, y luego va diciendo el número de votos, cuáles son los que se van a contar, los que son nulos y los que no lo son, y luego dice el Apartado 2, que es el que viene a impugnarse acá: “Tratándose de partidos políticos con candidatura común, si apareciere cruzado más de uno de sus respectivos emblemas se asignará el voto al candidato respectivo, lo que deberá consignarse en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo”. ¿Cuál es la regla que está diciendo? Bueno si marcaste dos partidos políticos, pues tu voto es nulo ¿por qué? pues porque marcaste a dos en lugar de nada más a uno, no se le puede computar a los dos independientemente de que después pueda haber o no convenio o lo que sea. Lo cierto es que aquí está diciendo:

El voto es nulo pero no va a ser nulo respecto del candidato.

Entonces volvemos a lo mismo, que era un poco en la línea del Ministro Luis María Aguilar, los dos artículos, en realidad a lo que se están refiriendo es a que esos votos que al ser marcados de manera indebida por haber sido dobles, desde un punto de vista inicial ¿Serían nulos? Sí lo son para el partido político, no lo son para el candidato.

Entonces, el candidato va a quedarse con esos votos, al quedarse el candidato con esos votos solamente se está refiriendo a la validez de los votos respecto del candidatos. Entonces en esa tesitura estaríamos dentro de la inoperancia de los conceptos de invalidez porque en realidad los artículos al determinar la validez de ese voto, está referida al candidato, por lo que hace al partido la está declarando nula ¿por qué? porque se marcó mal.

Entonces al final de cuenta creo que sí podría declararse un poco la inoperancia de los conceptos de violación que están referidos más al partido político, no al candidato, y los artículos se están refiriendo a cómo va a salvar la nulidad del voto respecto del candidato, la del partido político está declarando: se marcó mal y por tanto va a ser nulo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente, respetuosamente discrepo de lo que se acaba de mencionar, los artículos 192 y 193 no

hablan o no se refieren exclusivamente a los votos nulos, a lo que se refieren es al escrutinio y cómputo; el numeral 2, es el que habla de votos nulos, inciso a), inciso b) se acabaron los votos nulos, el numeral 3, perdón, no dice este voto será nulo, simplemente dice cómo se va a computar un voto que es válido, el voto por candidatura común a diferentes partidos, diferentes recuadros es un voto válido, el problema no es la validez del voto, el problema es cómo se computa o a quién se computa ese voto, y la solución que da el legislador es solamente al candidato, por lo cual prácticamente, se deja sin ningún efecto el voto en relación con los partidos políticos y a mí, esto es lo que me parece que sí es inconstitucional.

Se vulnera de entrada la equidad a unos partidos sí se les asignan los votos que tienen y a otros no, y esta falta de equidad deriva también en una afectación al derecho que tienen los partidos políticos a que se les compute y asigne el voto universal y secreto que los ciudadanos emiten en favor de ellos, y esto afecta el financiamiento y afecta la representación proporcional y a los ciudadanos también se les está afectando el derecho al sufragio porque estamos nosotros supliendo y diciendo: Los ciudadanos no quisieron votar por los partidos.

Entonces, a mí me parece que la solución que tiene el legislador en este punto es inconstitucional, además de esto por lo que decía muy bien el Ministro Franco porque se rompe y se distorsiona el sistema no estamos en candidaturas independientes un sistema, de partidos en

donde la legislación, simple y sencillamente quita todo valor al voto por lo que hace a los partidos, me parece que al romper la lógica del sistema es inconstitucional y por ello creo que tampoco hay una inoperancia porque estamos en acción de inconstitucionalidad, los preceptos sí fueron impugnados, ya dijimos que el diverso 63 no lo vamos a analizar y tienen todo el derecho a dolerse de esta situación los partidos políticos que precisamente es lo que alegan, que hay un voto que se emite en una candidatura independiente y se le resta todo valor, no se está diciendo que sea nulo, ni siquiera se está estableciendo una excepción al voto nulo; el numeral 3 se refiere a una cosa distinta.

Ahora, este escrutinio en cómputo y casilla obviamente de aquí después se va a dar la calificación electoral, etcétera, pues con base en esto, y obviamente esto va a repercutir en los porcentajes de los partidos políticos al final del proceso electoral.

Por eso reitero que, en mi opinión, coincidiendo con el Ministro Franco, estos preceptos son inconstitucionales. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A ver, tengo cosas que decir, ha pedido la palabra la señora Ministra Sánchez Cordero, la señora Ministra Luna Ramos.

Como ustedes saben tengo un compromiso oficial que atender, entonces les propongo levantar en este momento

la sesión, ojalá quisieran ustedes seguir discutiendo el tema sin llegar a la votación y el jueves podríamos empezar un poco más temprano.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: No, mejor la levantamos.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Perdón señor Presidente.

Considerando que el Pleno hoy en día por diferentes razones no está integrado más que con nueve de los señores Ministros, faltando otro parecería que aunque podemos sesionar legalmente con ocho, es el quórum mínimo. Estimo que sería conveniente por esas razones que estuviera el señor Presidente presente y nos integráramos todos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entonces les consulto: ¿Creen que siga mucha discusión? Porque tengo anotadas a las señoras Ministras Sánchez Cordero, Luna Ramos y yo quiero decir algo, pero yo podría esperar estas participaciones y ver si ya podemos votar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Sí, yo creo que mejor seguimos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entonces lo reducimos a tres participaciones. Ministra Sánchez Cordero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Yo declino.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Señor, nada más había levantado tarjeta blanca porque mencionó por el señor Ministro Zaldívar que yo me refería a que el 192 era de votos nulos, no, empecé leyendo el artículo diciendo que era el acta de escrutinio y cómputo, y que era el punto dos el que se estaba refiriendo a los votos nulos; como era la parte impugnada, a eso hice referencia, pero nunca señalé que fuera exclusivamente de votos nulos. Esa es una aclaración.

Y por otro lado, el artículo 63, es cierto que se ha dicho que es parte del sistema y que a final de cuentas no fue impugnado y todo, pero es que la solución de este problema estaría en el 63, no en éstos; en el 63 podría haberse establecido, no lo estableció el legislador, pero así como estableció el convenio para efectos de financiamiento, para quién le iba a contar el voto para efectos, pudo haberse establecido precisamente a quién se le iba a contar el voto que viniera doble, pero no se estableció y finalmente tampoco se impugnó.

Entonces, por esa razón sí creo que hasta ahorita, hasta ahorita, no sé todavía si después de escuchar otras participaciones pudiera cambiar, creo que podría establecerse la inoperancia de los conceptos y determinar la constitucionalidad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Cuál es la regla esencial de nuestra democracia? Un ciudadano un voto, y este voto es para partido político y para candidato.

¿Qué pasa si un ciudadano marca dos partidos políticos y dos candidatos? El voto es nulo. ¡Ah! pero entonces dice el señor Ministro Zaldívar: Y por qué dejan a los partidos políticos sin estos votos, cuando bien puede hacerse la suma total de votos donde marcaron determinada sigla y esta otra sigla, y la suma total, hacer una bolsa y distribuirlos, porque finalmente en todos los casos se marcaron dos o más partidos políticos.

Entonces, aquí la ley dice “es nulo el voto” y ahí no hay problema. Bien, vamos al caso del candidato común, encuentro una sigla y un nombre del candidato, y luego abajo encuentro otra sigla con el mismo nombre del candidato. Cruzo los dos partidos políticos, y aquí la ley da una solución que a mí me parece muy correcta, este voto cuenta para el candidato y no para el partido político. ¿Por qué me parece correcta? Porque en el caso de la candidatura común se llevan tres conteos de votos: Los que obtiene el candidato por la suma de votos de dos partidos, los que obtiene cada partido político que apoyaron al mismo candidato. A cada partido político dicen: Sostuviste a fulano de tal, que él obtuvo cien votos, de esos cien votos por tu partido le llegaron setenta, te los abono a ti partido político. Al otro partido le debe decir: Por tu partido político llegaron treinta y se completaron los cien en esta casilla política, ¡ah!, pero fíjate que no da el cien redondo, porque me

encontré tres casos donde los ciudadanos se equivocaron o intencionalmente marcaron los dos partidos políticos, se lo cuento al candidato y se lo resto a los dos partidos políticos, como en la otra regla donde hay dos candidatos y se marcan dos partidos políticos el voto es nulo para todos, para el candidato y para los partidos.

Esta solución está en la ley, es regla del juego electoral, está dicha de antemano y coincide con la misma solución a la que frente al problema de facto sin solución legal el Tribunal Electoral encontró, aquí tengo que interpretar la intención del votante y la intención del votante no fue favorecer a ninguno de los dos partidos políticos sino solamente al candidato.

Tenemos que interpretar también el error del votante, es el mismo error de cuando vota por dos candidatos, es más grave el que abarca dos candidatos, pero ¿por qué no van los partidos políticos a la coalición? Porque tienen mucho más requisitos y el financiamiento y todo es mucho más difícil de lograr, pero si van a la candidatura común de antemano saben lo que va a suceder con el cómputo de votos cuando se dé esta situación.

No tengo la visión de que se trata de un inmenso número de votos donde los ciudadanos nos equivocamos; los votos nulos en el total de una elección federal han andado en el rango entre el 2, el 3, el 4%, ya esto es una barbaridad de votos nulos; entonces no hay una consecuencia dramática para efectos de prerrogativas de los partidos políticos.

Ahora, ¿qué disposición de la Constitución viola esto? Creo que ninguna, da certeza, da claridad, da definitividad, se cumplen los principios de la materia electoral y tal como se ha dicho, el concepto no puede operar en este caso porque la disposición de la ley no contraría ninguna norma de la Constitución, con mucho respeto para quienes sí ven esta consecuencia, por eso les decía: Si creen que hasta aquí está suficientemente discutido, votemos este tema.

Entonces, consulto al señor Ministro si sostiene la validez del artículo impugnado solamente por estas razones de que en los dos preceptos no hay contradicción a la Constitución, a los principios de certeza, definitividad, claridad, etcétera, y acogiendo un poco la referencia de la Sala Superior, ¿fue la propuesta señor Ministro Cossío, las razones?

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Sí señor.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Como propias del Pleno.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En esos términos ponemos a votación esta parte del proyecto, reconoce validez de los dos preceptos impugnados.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Con el proyecto modificado.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Igual.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: En contra por no ser acordes con el sistema constitucional y legal en materia electoral en México y en el Estado.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: En contra.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con el proyecto modificado.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: También.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: En el mismo sentido.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE, ORTIZ MAYAGOITIA: En favor del proyecto modificado.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de siete votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en reconocer la validez de los artículos 192, numeral 3; y 194, numeral 2 del Código Electoral impugnado.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Es decisión del Pleno, señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor Presidente. Nada más para anunciar que en el voto ya anunciado anteriormente, se sumará este punto,

y si el Ministro Zaldívar desea también sumarse estaré encantado.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Sería un honor, gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ahora voy a decretar, no sé si el final de la sesión o el receso.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: El final señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: El final, bien levanto la sesión pública de esta mañana y los convoco para la que tendrá lugar el próximo jueves en este lugar y a la hora ya convenida de las once horas. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN PÚBLICA A LAS 13:15 HORAS).